FICHA 4: El primer peronismo (1946–1955): redistribución, movilidad social y polarización política

1. El contexto de posguerra: la "ventana de oportunidad"

La llegada de Perón al gobierno en 1946 coincidió con un escenario internacional excepcionalmente favorable que funcionó como una "ventana de oportunidad" histórica para la Argentina. Tres condiciones estructurales explican ese momento:

- Acumulación de reservas. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Argentina exportó carnes y granos a una Europa en guerra que no podía pagar con manufacturas. El resultado fue la acumulación de reservas récord en el Banco Central. Sin embargo, como veremos, estas reservas eran fundamentalmente libras esterlinas "bloqueadas" en Gran Bretaña que no podían convertirse libremente fuera del sistema imperial británico.
- Protección industrial "de hecho". La destrucción europea y la lentitud de las potencias para reconvertir sus industrias bélicas a la producción civil otorgaron a las fábricas locales un margen temporal de protección frente a la competencia extranjera. El mercado interno estaba, en los primeros años del gobierno, virtualmente asegurado.
- Legitimación del intervencionismo estatal. El descrédito del liberalismo económico clásico tras la Gran Depresión había producido un giro ideológico global. El New Deal norteamericano, el Plan Beveridge británico y los Estados de Bienestar europeos en formación validaban la premisa de que el Estado debía regular la economía, sostener el empleo y garantizar la paz social. Los economistas llaman a este giro "keynesianismo", en referencia al británico John Maynard Keynes, cuyas ideas proveyeron el andamiaje teórico que el peronismo adoptó para justificar su modelo redistributivo.

2. El intervencionismo económico redistributivo

El núcleo del proyecto económico peronista consistió en profundizar la industrialización orientada al mercado interno, utilizando al Estado como el gran reasignador de recursos. El mecanismo central era, en su lógica básica, relativamente simple: extraer renta del sector agropecuario y transferirla hacia los salarios urbanos y la industria nacional.

2.1. El IAPI y la transferencia de la renta agraria

El instrumento clave fue el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI), creado en 1946. El IAPI monopolizó el comercio exterior de los productos agropecuarios: compraba las cosechas y la carne a los productores locales a precios fijos internos —generalmente inferiores a los del mercado mundial— y las revendía a una Europa hambreada de posguerra a precios internacionales elevados. La diferencia quedaba en manos del Estado, que la utilizaba para subsidiar la industria nacional y expandir el consumo popular.

Esta mecánica tuvo un costo político inmediato: desató un conflicto estructural con las corporaciones agrarias tradicionales, especialmente la Sociedad Rural Argentina, cuyas ganancias se veían recortadas por la mediación estatal.

2.2. La nacionalización de los servicios públicos

En 1948, el gobierno estatizó los ferrocarriles británicos bajo una racionalidad económica precisa: utilizar las libras esterlinas acumuladas y bloqueadas en Londres que, de otro modo, eran técnicamente incobrables. Transformar deuda externa improductiva en infraestructura pública soberana era, al mismo tiempo, un gesto político de enorme impacto simbólico y una decisión económicamente racional. El mismo criterio guio la estatización del gas, los teléfonos y los transportes urbanos. El Estado resultante era capaz de controlar los resortes estratégicos de la economía y, al mismo tiempo, subsidiar las tarifas de servicios básicos para abaratar el costo de vida de la clase obrera.

3. La alianza de clases y sus tensiones internas

El peronismo articuló una coalición marcadamente heterogénea. La integraban la clase obrera urbana, fracciones del Ejército con orientación nacionalista y sectores de una burguesía industrial local orientados al mercado interno. La lógica de la alianza descansaba en una complementariedad funcional aparentemente sólida: los empresarios industriales necesitaban salarios altos que sostuvieran la demanda de su producción; los trabajadores necesitaban del Estado como árbitro que garantizara sus conquistas frente a los patrones; el Estado necesitaba de ambos para financiar el modelo y legitimar el régimen.

Sin embargo, esta complementariedad ocultaba tensiones estructurales irresolubles. Los sectores empresariales apoyaban la expansión del consumo popular en tanto garantizaba ventas, pero miraban con alarma creciente las regulaciones sobre condiciones de trabajo y la pérdida de autoridad dentro de las plantas fabriles. La doctrina oficial proclamaba la "armonía de clases": obreros y empresarios, presentados como socios en el proyecto nacional, debían resolver sus diferencias dentro de un Estado que actuaba como árbitro imparcial. Esa armonía convivía, sin embargo, con una disputa cotidiana y latente por la distribución del excedente y el control del proceso productivo. No era una contradicción accidental: era estructural al modelo, y uno de los ejes que explican la inestabilidad de largo plazo del peronismo como proyecto político.

Un actor de la coalición merece una presentación particular: Eva Perón. Su figura desbordó desde temprano el rol ceremonial de "primera dama" para convertirse en un nodo político funcional de la alianza. A través de la Fundación Eva Perón, creada en 1948, desplegó una distribución directa de bienes y servicios —viviendas, máquinas de coser, bicicletas, becas, hogares para niños— hacia los sectores más vulnerables, incluyendo a trabajadores informales y mujeres que quedaban al margen de la negociación sindical formal. La Fundación no era un programa social en el sentido burocrático/institucional: era una cadena de mediación personal entre el Estado y los excluidos, cuya

lógica política estaba cargada de un mensaje explícito: lo que allí se distribuía era un derecho —justicia social— y no una dádiva de la caridad privada. Este desplazamiento simbólico, que transformó la asistencia en ciudadanía, tenía efectos concretos: construyó lealtades políticas directas al liderazgo, por encima de la mediación de los sindicatos. Eva Perón fue, además, la figura central en la campaña por el voto femenino —conquistado en 1947— y en la organización del Partido Peronista Femenino, creado en 1949, que movilizó a mujeres que hasta entonces habían permanecido fuera de la política formal.

4. La sociedad móvil

El análisis de Juan Carlos Torre y Elisa Pastoriza —en su estudio sobre la democratización del bienestar en el período peronista— desmonta dos ideas igualmente erróneas: que el peronismo produjo una nivelación de la sociedad, y que generó una cultura obrera diferenciada y alternativa a la de las clases medias. Lo que muestran es algo más complejo y más contradictorio.

EN primer lugar, la redistribución del ingreso no disolvió las diferencias de clase: las trasladó hacia arriba de modo relativamente uniforme. Los asalariados alcanzaron el 53% del ingreso nacional en 1948, el punto más alto del período. Pero la jerarquía interna entre pequeños propietarios, trabajadores de cuello blanco y obreros calificados y no calificados se mantuvo casi intacta. Todos subieron un peldaño; nadie cambió de posición relativa en la pirámide. La movilidad fue real, pero el orden entre posiciones se preservó.

En segundo lugar, las medidas de bienestar de alcance general beneficiaron desproporcionadamente a quienes ya contaban con más recursos, información y estabilidad previa. La “tajada mayor” de los beneficios fue capturada por las clases medias y las capas más acomodadas de la clase trabajadora, no por los sectores de la base social más baja. Un ejemplo: los créditos del Banco Hipotecario Nacional para vivienda llegaron primero y con mayor amplitud a los empleados públicos con ingresos estables; los trabajadores irregulares o recién llegados a la ciudad, sin documentación ni empleo formal, quedaron al margen.

En tercer lugar, contra la imagen de un peronismo exclusivamente orientado a los sectores obreros, los datos censales de 1947 y 1960 muestran que las ocupaciones de clase media —empleados públicos, bancarios, comerciales— crecieron a un ritmo anual del 25%, frente al 18% de las clases trabajadoras manuales. El dinamismo del Estado y los servicios fue el principal motor de movilidad ascendente. Un dato concreto ilustra la magnitud del proceso: un tercio de los hijos de hogares obreros manuales transitó hacia ocupaciones de clase media asalariada durante el período.

Por último, el proyecto peronista no impugnó los valores o los códigos estéticos de las clases medias, sino que los convirtió en el estándar mínimo al que todos los trabajadores debían aspirar y acceder. No creó una cultura obrera alternativa, sino que buscó universalizar, como horizonte de la movilidad social de los trabajadores, el modo de vida asociado hasta entonces a la respetabilidad de los sectores medios: el confort doméstico, la vestimenta formal, el veraneo en Mar del Plata, el departamento propio.

Las consecuencias fueron paradójicamente explosivas. Precisamente porque los trabajadores no rechazaban los valores de las clases medias, sino que los adoptaban y los practicaban —iban a "sus" balnearios, usaban "su" ropa, compraban en "sus" comercios—, la reacción de los sectores acomodados fue intensa. Esta irrupción obrera en los espacios históricamente reservados fue vivida por las clases medias tradicionales y los sectores altos como una invasión que borraba los límites simbólicos del orden social: no porque los trabajadores cuestionaran sus valores, sino porque se los apropiaban. La prensa opositora lo expresó con categorías denigratorias —"hordas", "mascaradas", "cabecitas negras"— que revelaban el malestar ante la pérdida de exclusividad de esos espacios y consumos.

Este análisis permite leer la polarización política que culminaría en 1955 no como un conflicto puramente ideológico o institucional, sino como el producto de una democratización material que amenazaba los privilegios de distinción de las clases medias y altas, precisamente porque operaba por emulación y no por impugnación.

5. La experiencia obrera, el modelo sindical y las tensiones entre integración y ruptura.

El acceso a derechos laborales y la legitimidad política otorgada por el Estado peronista dotaron a los obreros de un lenguaje y una confianza que desafiaron las jerarquías tradicionales de las patronales. La potestad para cuestionar los ritmos de producción impuestos, la negativa a aceptar como inevitable el despido arbitrario, la defensa activa de la propia dignidad en el lugar de trabajo representaron una ruptura real y vivida con el orden anterior para los trabajadores que habían vivido la experiencia de humillación y exclusión de los años treinta.

Esta energía contestataria vivida, emanada de la experiencia de los trabajadores, era reconocida y movilizada en los rituales del movimiento, pero también contenida dentro de los límites que el propio Estado peronista fijaba. El discurso del gobierno articulaba la identidad obrera dentro de un marco ideológico que enfatizaba la armonía entre capital y trabajo, la lealtad al líder y la integración nacional por sobre el conflicto de clases. El movimiento nacido del 17 de octubre contenía en su interior una "cultura de oposición" —una experiencia real de afirmación de dignidad frente a la patronal—, pero esa cultura fue progresivamente encuadrada y limitada por la estructura verticalmente organizada del partido.

En efecto, la disolución del Partido Laborista en 1946 y la unificación partidaria de 1947 clausuraron cualquier canal de expresión política obrera autónoma, subordinando la identidad sindical emergente a la disciplina del Partido Peronista. La división en ramas de 1949 culminó este proceso: la rama sindical quedó formalmente integrada al movimiento, pero despojada de una estructura propia de deliberación política.

El análisis de Louise Doyon de las transformaciones organizativas de largo plazo dentro del movimiento sindical a lo largo de estos años, muestra un panorama semejante en cuanto a las tensiones entre ruptura e integración.

Por un lado, la articulación estrecha entre los sindicatos y el Estado peronista generó un proceso sostenido de centralización y burocratización. Las conducciones gremiales se profesionalizaron y adquirieron una capacidad real para intervenir en las relaciones entre capital y trabajo. Pero esta potestad dependía del aval del Estado: este era quien homologaba convenios colectivos y otorgaba la personería gremial. Esa dependencia estructural comprometió la autonomía real de los sindicatos.

Por otro lado, sin embargo, el peronismo dejó un legado organizativo concreto e irreversible: las comisiones internas de fábrica. Estos organismos de representación directa de los trabajadores en el lugar de trabajo, creados y expandidos durante el período peronista, constituyeron una estructura de poder obrero en el espacio productivo que ni el Estado ni los patrones pudieron desmantelar. A diferencia de las conducciones sindicales centralizadas, las comisiones internas operaban en el lugar de trabajo, en contacto directo y cotidiano con las bases. Por ende, obedecían a una lógica totalmente diferente (y opuesta) a las dirigencias.

Como veremos, la importancia histórica de ese legado se revelaría con claridad después de 1955: cuando el peronismo fue proscrito y las conducciones sindicales fueron intervenidas o depuradas por los gobiernos militares, las comisiones internas sobrevivieron como el núcleo organizativo de la resistencia obrera. Fueron ellas —no las elites dirigentes burocratizadas— las que impidieron que el golpe contra el peronismo significara su desaparición.

En conclusión, la ambivalencia del peronismo reside en una tensión irresuelta: entre la experiencia subjetiva de los trabajadores —que vivieron el peronismo como una ruptura genuina con el desamparo de los años treinta— y la lógica institucional del movimiento, que canalizó esa energía hacia formas de movilización controladas desde arriba. No fue ni pura integración ni pura ruptura: fue las dos cosas a la vez, y esa dualidad irresuelta es la clave para entender tanto la fuerza como los límites del peronismo.

6. Los límites estructurales: el fin de la fase “fácil” de sustitución de importaciones

A fines de la década de 1940, el modelo económico peronista comenzó a mostrar una contradicción de fondo que los propios éxitos de los años anteriores habían ocultado. La industrialización que se había impulsado —la ISI en su fase "fácil", centrada en bienes de consumo masivo como textiles, alimentos y calzado— dependía, para seguir creciendo, de importar precisamente lo que no producía: maquinaria pesada, acero, insumos químicos, bienes de capital. En otras palabras, para fabricar más cosas en el país, había que comprarle más cosas al exterior. Y para comprarle al exterior, hacían falta divisas —dólares, básicamente— que sólo se obtenían exportando. Pero Argentina exportaba casi exclusivamente productos agropecuarios: granos y carne. Bienes que, además, eran la base de la canasta alimentaria de las masas obreras, por lo que la mejora del empleo (y los salarios) disminuía los saldos exportables. El círculo se cerraba sobre sí mismo en forma de estrangulamiento de balanza de pagos: la industria crecía, demandaba más empleo y más importaciones, los saldos exportables disminuían y las importaciones requerían más divisas, se producía un desequilibrio creciente en la balanza comercial, y el crecimiento se frenaba.

Este no era un problema de gestión, era una limitación estructural del patrón de industrialización sustitutivo. La ISI "difícil" —el salto hacia la industria pesada, la siderurgia, la petroquímica, la producción de maquinaria— requería inversiones de una escala y un plazo de maduración que excedían la capacidad del capital nacional. El modelo había consumido el margen excepcional que le habían dado las condiciones únicas de la posguerra: las reservas acumuladas durante la guerra, la demanda europea de alimentos, los precios favorables de las materias primas. Ese colchón se estaba agotando.

6.1. La crisis de 1949 y El Plan de Emergencia de 1952

El estrangulamiento no fue súbito sino gradual, pero hacia 1949 sus síntomas eran ya inequívocos: déficit comercial, caída de las reservas internacionales, presión sobre el tipo de cambio (precio del dólar), devaluación, inflación. La situación se agravó dramáticamente por un factor externo: las severas sequías del ciclo 1951-1952 desplomaron la producción agrícola y liquidaron los saldos exportables. El IAPI se quedó sin el flujo de recursos que lo sostenía. El mecanismo redistributivo central del modelo perdió su fuente de financiamiento genuino.

Ante la crisis, el gobierno respondió con el Plan de Emergencia de 1952. El diagnóstico era claro: había que frenar la demanda interna, estimular la producción agraria y contener la emisión monetaria. Las medidas concretas incluyeron:

- Congelamiento temporal de las negociaciones paritarias: los sindicatos acordaron suspender la puja salarial por dos años, aceptando en los hechos una caída del salario real.
- Racionamiento del consumo popular: se introdujeron restricciones concretas como el pan negro (en lugar de harina blanca) y los días de veda de carne —medidas que simbolizaban el fin de la abundancia redistribuida.
- Incentivos a la productividad agraria: se buscó recomponer el ingreso rural para estimular la oferta exportable, revertiendo en parte la lógica de transferencia campo-industria que había caracterizado la etapa anterior.

Este Plan hacía recaer el costo del ajuste sobre la clase obrera, era sin dudas un ajuste ortodoxo. El gobierno lo presentó como una emergencia transitoria y patriótica, apelando a la necesidad de una "segunda independencia económica". Logró, en gran medida, que su base social lo aceptara —lo que dice mucho sobre la intensidad de la identificación política construida en los años previos. Hacia 1954, con la economía estabilizada, se reabrieron las negociaciones colectivas y los salarios recuperaron parte del terreno perdido.

6.2. Las estrategias para profundizar el ISI

La crisis expuso con claridad el gran dilema de la industrialización sustitutiva, que el gobierno peronista no resolvió y que se convertiría en el problema central de la economía argentina durante las décadas siguientes: ¿cómo sostener el crecimiento industrial sin que la demanda de divisas para importar insumos y maquinaria supere la capacidad de generarlas vía exportaciones agropecuarias?

Las salidas teóricas eran —y son— básicamente dos, y las dos resultaban políticamente problemáticas para la coalición gobernante:

1. Desarrollar la industria de base (siderurgia, petroquímica, bienes de capital): requería inversiones masivas, de larga maduración, que excedían la capacidad del capital nacional y exigían o bien endeudamiento externo, o bien inversión extranjera directa.
2. Aumentar las exportaciones para generar más divisas: requería mejorar la rentabilidad del sector agropecuario, lo que implicaba revertir la política de bajos precios agrarios —que otorgaba a industria insumos baratos y a los consumidores alimentos baratos.

Dos episodios de 1955 ilustran con precisión tanto la urgencia del problema como los límites que la propia alianza peronista imponía a su solución.

6.2.1. El Congreso de la Productividad

En marzo de 1955, el gobierno convocó al Congreso de la Productividad, un encuentro tripartito entre el Estado, la CGT y la CGE (Confederación General Económica, que nucleaba a los empresarios industriales afines al peronismo). El diagnóstico empresarial era directo: ante la imposibilidad de renovar los bienes de capital —las máquinas estaban envejecidas, no había divisas para importar nuevas—, la única manera de mejorar la rentabilidad y acumular capital era aumentar la productividad del trabajo. Esto significaba, en términos concretos: mayor rendimiento por obrero, reducción del ausentismo, reorganización de tareas en la fábrica, posibilidad de flexibilizar la asignación de funciones.

El problema era que estas demandas chocaban de frente con las conquistas laborales obtenidas en la fábrica durante los años de auge peronista: los ritmos de trabajo negociados, las categorías protegidas, la resistencia a la intensificación de tareas. La iniciativa naufragó ante la oposición de las bases sindicales, que identificaron en las cláusulas de "racionalización" una amenaza concreta a las condiciones de trabajo conquistadas. El episodio reveló que la alianza entre el gobierno y los sindicatos tenía un límite interno: el pacto distributivo podía tensionarse en las negociaciones salariales, pero no en el control obrero del proceso de trabajo.

6.2.2. El contrato con la Standard Oil

En mayo de 1955, el gobierno peronista firmó un contrato con la Standard Oil de California para la exploración y explotación de petróleo en la Patagonia. El viraje era mayúsculo: el mismo gobierno que había hecho de la soberanía sobre los recursos estratégicos un pilar de su discurso —y que en 1947 había nacionalizado los servicios públicos— cedía ahora el acceso al subsuelo a una corporación extranjera.

La lógica era económica y urgente: desarrollar la producción petrolera propia permitiría reducir la factura de importación de combustibles, una de las principales fuentes de drenaje de divisas. El petróleo era, en este sentido, una llave posible para el dilema estructural.

Pero el contrato jamás entró en vigor. Su debate parlamentario fue liderado por el entonces diputado radical Arturo Frondizi, quien denunció las cláusulas del acuerdo como lesivas para la soberanía nacional y trabó su ratificación legislativa. La ironía histórica es notable: Frondizi, que bloqueó el contrato con argumentos soberanistas, sería quien —ya como presidente a partir de 1958— impulsara con mayor decisión la apertura al capital extranjero en el sector petrolero, bajo la misma lógica desarrollista de resolver la restricción externa.

El golpe de Estado de septiembre de 1955 liquidó el debate antes de que se resolviera.

6.3. Los límites del ISI y el fin de la coalición peronista

Los dos episodios de 1955 deben leerse juntos. Revelan que el gobierno peronista, a medida que el modelo sustitutivo agoto su fase inicial, comenzó a explorar salidas que tensionaban su base social: mayor disciplina laboral, apertura al capital extranjero, revisión de los términos del intercambio campo-industria. Esta contradicción, como veremos, no desapareció con el derrocamiento del peronismo, sino que se convirtió en el hilo conductor de la historia económica y política argentina de las décadas posteriores.

7. Concentración del poder político, polarización y crisis política

Desde el inicio del gobierno la vasta ampliación de la ciudadanía social y los derechos de las mayorías coexistió con una sostenida centralización del poder político en la figura del líder y en la identificación orgánica entre movimiento, Estado y nación. Estos dos procesos no fueron contradictorios: se alimentaron mutuamente.

En un clima de extrema polarización, la oposición política y los sectores civiles tradicionales fueron frecuentemente caracterizados como “enemigos del pueblo” o representantes de intereses oligárquicos y antinacionales. Esta dinámica cerró canales de disidencia a través de mecanismos concretos:

- Intervención federal a las universidades nacionales, que habían sido bastiones del reformismo y la oposición estudiantil.
- Censura previa y asfixia económica a los medios de comunicación opositores. El hito emblemático fue la expropiación del diario La Prensa en 1951, uno de los más importantes del país.
- Persecución judicial y hostigamiento policial a dirigentes sindicales y políticos no alineados con la conducción oficial.

La reforma constitucional de 1949 institucionalizó esta centralización del poder. Incorporó los derechos sociales y la propiedad estatal de los recursos energéticos, pero al mismo tiempo habilitó la reelección presidencial indefinida y restringió el derecho de huelga.

La nueva ley electoral de 1951, con su sistema de circunscripciones uninominales diseñadas con criterios de gerrymandering, distorsionó la representación en favor del oficialismo y completó un andamiaje que vaciaba de competitividad a los comicios de noviembre.

La muerte de Eva Perón en 1952 privó al régimen de su principal figura de mediación directa con las bases y de un polo de lealtad interna. Su figura había desbordado el rol ceremonial de “primera dama” para convertirse en una figura política clave del movimiento y en dispensadora de bienestar material —a través de la Fundación— hacia los sectores excluidos de la negociación sindical formal.

Su ausencia, combinada con el impacto de la crisis económica, impulsó la profundización de la verticalidad y el repliegue sobre una retórica cada vez más ritual. La "Nueva Argentina" —paz, prosperidad y justicia social— se transformó en un eslogan oficial que ya no admitía fisuras: el discurso fundacional, que en los primeros años había convivido con cierta porosidad al conflicto y al debate interno, se endureció en una tónica "pasatista" y superficial que silenciaba cualquier expresión de disidencia, incluso cuando provenía de actores propios. Las críticas de dirigentes como De Carril a la política petrolera o las lecturas revisionistas del pasado nacional que no encajaban en la narrativa oficial fueron suprimidas en nombre de una unanimidad forzada.

En junio de 1954, la creación de una junta promotora de la Democracia Cristiana por parte de sectores católicos opositores puso en alerta al régimen, que vio en ella la amenaza de un partido confesional capaz de disputarle las bases obreras. La rivalidad hundía sus raíces en un malestar acumulado. La creciente ritualización del discurso gubernamental —con su despliegue de una liturgia política propia, sus símbolos y su canonización laica de Eva Perón— era percibida por la jerarquía eclesiástica como una religión sustituta que competía con el catolicismo en el mismo terreno de la sacralidad. A esto se sumaba la acción de la Fundación Eva Perón, que había transformado las formas tradicionales de la caridad cristiana —asistencia discreta, mediación de las damas de beneficencia— en una maquinaria estatal de distribución masiva y directa, cuyo mensaje implícito era que la ayuda era un derecho (justicia social) y no una dádiva de los poderosos.

La escalada fue vertiginosa. En diciembre, la ley de divorcio vincular, el decreto de autorización de prostíbulos y la prohibición de procesiones y actos religiosos públicos convirtieron la tensión latente en ruptura abierta. En mayo de 1955, la derogación de la enseñanza religiosa obligatoria terminó de movilizar a una oposición que encontró en la fe ultrajada un aglutinante inédito. La procesión de Corpus Christi del 8 de junio lo exhibió con crudeza: radicales, socialistas y comunistas marcharon juntos gritando "¡Cristo Rey!". Ocho días después, el 16 de junio de 1955, aviones de la Marina de Guerra bombardearon la Plaza de Mayo en plena tarde, cuando la plaza estaba llena de civiles. Fue el primer ataque aéreo deliberado de las fuerzas armadas argentinas contra su propia población: más de trescientas personas murieron, centenares resultaron heridas. Esa noche, en respuesta, grupos civiles peronistas incendiaron la Curia Metropolitana y varias iglesias históricas del centro porteño.

El 16 de septiembre de 1955, un golpe cívico-militar derrocó al gobierno e inició la autodenominada Revolución Libertadora. El peronismo fue proscripto, sus símbolos prohibidos y su mención en el espacio público penalizada. La proscripción duraría dieciocho años.

Pero proscribir un movimiento no equivale a resolver las contradicciones que lo engendraron. Los problemas que el peronismo había puesto en el centro de la escena —cómo distribuir la renta, quién

controla el Estado, qué lugar ocupa la clase obrera en la política nacional— reaparecerían, con intensidad creciente, en cada crisis política de las décadas siguientes: en el desarrollismo de Frondizi, en la inestabilidad del gobierno de Illia, en el Cordobazo de 1969, en el retorno de Perón en 1973 y, finalmente, en el terrorismo de Estado sistemático de 1976. En ese sentido, el golpe de 1955 no cerró la era peronista: inauguró el largo conflicto por su herencia.

Bibliografía de consulta

Doyon, L. M. (1984). La organización del movimiento sindical peronista 1946-1955. *Desarrollo Económico*, Vol. 24, Nº 94, pp. 203-234.

James, D. (1990). *Resistencia e integración: el peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976*. Buenos Aires: Sudamericana.

Torre, J. C. (dir.), *Los años peronistas (1943-1955)*. Nueva Historia Argentina, Tomo 8. Buenos Aires: Sudamericana.

Giuliani, A. (2008): "Conformación y límites de la alianza peronista (1943-1955)" En Scaltritti, M. [et. al] *Historia argentina contemporánea: pasados presentes de la política, la economía y el conflicto social*. Vicente López. Dialektik Editora., pp. 161-198.